

A. Murga Frassinetti/ L. Hernández Palacios Contrarrevolución, lucha de clases y democracia en América Latina*

La abundante literatura acerca del proceso político-económico de la sociedad latinoamericana pareciera coincidir —independientemente de sus orientaciones teóricas y matices interpretativos— en que durante el transcurso de los últimos veinticinco años, América Latina ha transitado fundamentalmente por dos periodos. El primero se refiere al fracaso y quiebra del populismo como resultado del agotamiento definitivo de las bases materiales que sirvieron de sustento al proyecto nacional de desarrollo autónomo; el segundo alude a la contrarrevolución burguesa, derivada de las contradicciones generadas por el proceso de recambio y crisis estructural que afectó a dichas sociedades, y concretada en la emergencia de las nuevas dictaduras militares.¹

La evidencia es más que obvia. Durante los últimos quince años, la mayoría de los países latinoamericanos ha asistido a una rápida eliminación de los gobiernos liberal-democráticos, a una irrupción masiva de las Fuerzas Armadas en la escena política y, con ello, a una multiplicación sin precedente de regímenes militares. Así, junto a países gobernados con frecuencia por las Fuerzas Armadas, como Bolivia y los del área centroamericana, se encuentran otros que habían tenido, por el contrario, largas tradiciones "cívicas". Es el caso de Brasil —en cuya historia nunca se había dado un régimen militar *strictu sensu*— o de Chile y Uruguay —con una prolongada trayectoria democrático-parlamentaria de tipo europeo— que pasan, en el transcurso del periodo iniciado en 1964, a la constitución de un poder militarizado. Bajo otras modalidades, países que mantienen todavía la fachada democrática, a través del juego político-electoral, expresan también un proceso de paulatina militarización, manifiesto en el papel estratégico que asumen cada vez más las Fuerzas Armadas en el

* Trabajo presentado al XIII Congreso Latinoamericano de Sociología, Ciudad de Panamá, 19-23 de noviembre de 1979.

¹ Como se ha indicado, el reordenamiento político-económico encarado por los militares presenta dimensiones insospechadas. En esta fase del desarrollo capitalista, las Fuerzas Armadas no vinieron, como en el pasado, a ajustar algún elemento peligroso de la difícil mecánica económico-social, sino a modificar sustancial y profundamente el régimen social, de modo de darle una orientación más definida al sistema capitalista.

interior del aparato de Estado; tal es el caso de Colombia y Venezuela.²

De ese modo, al Estado populista, es decir, el "Estado de toda la burguesía" que favorecía la acumulación de todas las fracciones, lo reemplaza un nuevo Estado: el Estado de contrainsurgencia. Expresión superestructural del nuevo modelo de acumulación capitalista y de su propio esquema de dominación interna, el Estado de contrainsurgencia expresa la hegemonía de la fracción burguesa monopólica —nacional y extranjera— y su alianza con las Fuerzas Armadas, desarrollando una doble función:

por un lado, promover los ajustes estructurales necesarios a la puesta en marcha del nuevo orden económico que la integración imperialista requiere; por otro, reprimir tanto las aspiraciones de progreso material como los movimientos de reformulación política producidos por las acciones de las masas.³

Como quiera que sea, la incapacidad del populismo para superar sus propias limitaciones y dar lugar al desarrollo de las condiciones que la nueva modalidad de acumulación demandaba, implicó que el capital monopólico cancelara el "viejo periodo" estableciendo uno nuevo, mediante la instauración de las Fuerzas Armadas en el poder. Así, la nueva política económica, dirigida a desbloquear los obstáculos que frenaban la acumulación capitalista, abrió las puertas a profundas transformaciones en la configuración estructural de la sociedad latinoamericana. Pero, a la vez, también generó como consecuencia todo un nuevo sistema de contradicciones, cristalizadas en el curso de su desenvolvimiento, que han planteado al capital monopólico la búsqueda de nuevas alternativas políticas, con vistas a legitimar su hegemonía y garantizar su dominación en el conjunto de la sociedad.

En esa óptica, se inscriben los intentos de "redemocratización" de la sociedad latinoamericana; o, dicho en otros términos, el llamado proceso de *institucionalización de la contrarrevolución burguesa*.

Cabe plantear, por tanto, el objeto de este trabajo. Se trata de un análisis de la contrarrevolución burguesa en América Latina y de las perspectivas de su estabilización institucional. Para ello procederemos en dos partes. La primera analiza los factores que explican la entrada al periodo contra-

² Véanse, entre otros, los trabajos de M. Lowy y E. Sader, "La militarización del Estado en América Latina", *Cuadernos Políticos*, n. 13, 1977; N. Minello, "Ejército y poder en América Latina", *Cuadernos Políticos*, n. 6, 1975; y T. A. Vasconi, *Gran capital y militarización en América Latina*, ed. Era, México, 1978.

³ R. M. Marini, *Subdesarrollo y revolución*, ed. Siglo XXI, México, 1977, p. 20.

revolucionario y el carácter del Estado de contrainsurgencia. La segunda analiza las contradicciones en el seno de la contrarrevolución, las nuevas alternativas políticas planteadas por la burguesía, y sus limitaciones, en el marco del periodo actual por el que cruza la lucha de clases en la sociedad latinoamericana.

1

DESARROLLO CAPITALISTA Y CONTRARREVOLUCIÓN

El proceso político latinoamericano entró, desde mediados de la década de los sesenta, en un acelerado proceso de militarización, el cual no es, por lo demás, un producto del azar histórico sino un producto de la lógica histórica del desarrollo capitalista. En tanto tal, este proceso tiene causas explicativas y características definidas. Se trata en este apartado de precisar las vertientes explicativas que dan razón del proceso contrarrevolucionario y de militarización del poder estatal. Para ello, analizaremos cuatro cuestiones: la transformación del bloque político dominante, el ascenso del movimiento de masas, la política imperialista de la contrainsurgencia y, finalmente, el impacto de la crisis capitalista internacional en América Latina.

La transformación del bloque político dominante

No debemos olvidar que durante la segunda guerra mundial, el imperialismo norteamericano, enfrascado en el enfrentamiento bélico, se encontraba con una capacidad enormemente reducida de intervención económico-política en el continente. La guerra trajo como consecuencia una drástica reducción del intercambio comercial, pues los países imperialistas orientaron toda su producción a las necesidades bélicas. Ello fortaleció, en varios países de América Latina, una industria de sustitución de importaciones y una burguesía industrial nacional desarrollista que, con el apoyo de las fuerzas obreras y populares, logró controlar el gobierno y llevar a cabo políticas reformistas. Aun cuando algunos sectores de la burguesía imperialista miraron con recelo estos nuevos gobiernos de las burguesías industriales latinoamericanas, debieron aceptarlos porque la atención imperialista debía concentrarse en la guerra. Además, las nuevas burguesías permitían asegurar la dominación burguesa en nuestros países y el movimiento de masas no constituía todavía un peligro, ya que la izquierda latinoamericana seguía la línea del movimiento comunista internacional de aliarse al imperialismo yanqui contra el fascismo, impulsando así una política de conciliación de clases y de apoyo a las democracias burguesas. Lo primordial para el imperialismo yanqui era impedir que el fascismo asentara bases en

Latinoamérica, y al mismo tiempo, lograr que los nuevos gobiernos lo apoyaran en su esfuerzo bélico, o que al menos se mantuvieran neutrales.

Terminada la guerra, el imperialismo norteamericano, aunque impuso ciertas readecuaciones para encuadrar la dependencia de la nueva burguesía industrial, en general siguió la política de promover el desarrollo industrial asociado al capital imperialista, manteniendo siempre la estructura básica de economías dependientes exportadoras de materias primas. Sostuvo también, donde había condiciones que lo permitían, regímenes burgueses democráticos y siguió promoviendo la incorporación al mercado de sectores de capas medias e incluso obreras. La razón de ello no es que imperara en Estados Unidos una fracción democrática y reformista, sino que el extraordinario desarrollo de las fuerzas productivas en la economía norteamericana, como resultado del conflicto bélico, hacía más benéfico para la burguesía imperialista entrar en una nueva división internacional del trabajo: concentrar en la metrópoli el desarrollo de las nuevas industrias de punta, que le ofrecían una mayor tasa de ganancia, y transferir a los países dependientes los rubros productivos de tecnologías ya obsoletas en la metrópoli, pero que en nuestras economías encontraban un excelente campo de inversión, pues podían contar con una mano de obra muy barata.

Cabe anotar, además, que las bases objetivas de estas transformaciones afirmaban la tendencia imperialista hacia la integración de los sistemas de producción, profundizando así las limitaciones y debilidades del nacional desarrollismo para resistir, en esta nueva fase, el asedio y las presiones del capital imperialista para penetrar en la economía industrial latinoamericana.

Se perfila así un nuevo reordenamiento del sistema de poder, en cuanto al eje de la acumulación; el sector industrial pasa a expresar nuevas características. Entre ellas cabe destacar, para los fines del análisis, las siguientes: a] el control y dominio del capital extranjero, de los nuevos sectores y ramas industriales que se desarrollan; b] la intensificación de la monopolización, concentración y centralización de la economía, mediante la instalación de grandes empresas extranjeras y la absorción, por parte de éstas, de empresas nacionales; c] la desnacionalización progresiva del sistema industrial hasta entonces controlado por el capital nacional; y d] la integración cada vez más articulada de los intereses del capital extranjero con el gran capital nacional y, por tanto, la formación y consolidación del gran capital monopolístico.

Aun cuando los resultados de la abundante investigación acerca de estas tendencias se encuentran dispersos, basta mencionar algunos indicadores suficientemente ilustrativos, al nivel más general, de la

celeridad de las inversiones extranjeras y, particularmente, de la canalizada al sector industrial.⁴

En otro nivel, como es el relativo a la importancia y el significado de las filiales norteamericanas, hay evidencias importantes. Analizando el tamaño de las empresas extranjeras y nacionales más grandes en Brasil, Fajnzylber ha anotado que el 44% de las filiales ocupaban a más de quinientas personas mientras que, para el caso de las empresas nacionales, esa proporción era sólo del 13.5%. Al nivel de las ramas industriales, se observó también un claro predominio de las filiales en el grupo de las empresas más grandes de cada rama.⁵ En lo que respecta al control de la producción industrial, el trabajo de Cinta es suficientemente ilustrativo. Basado en la información de las 938 empresas industriales más grandes de México, el autor reporta que las filiales extranjeras controlaban el 48% de la producción del grupo de las cincuenta más grandes del país y el 37% de las 100 más grandes.⁶ Finalmente, con respecto al dinamismo de las filiales extranjeras, la CEPAL ha reportado que ya sea comparando el ritmo de crecimiento de la producción del sector industrial con el de la producción y/o las ventas de las filiales, éstas presentan ritmos de crecimiento más elevado que el del conjunto del sistema industrial.⁷

Lo hasta aquí apuntado permite sostener que el agotamiento de una fase y la entrada en otra nueva, en el proceso de industrialización, significó no solamente la reorientación de la producción industrial,⁸ sino también la entrada masiva de capital extranjero a la vez que la presencia de una acelerada concentración y monopolización del capital. Este mero dato rebasa obviamente el campo de lo estrictamente "económico" para cristalizarse en una serie de consecuencias e implicaciones "no económicas".

En todo caso, lo más significativo para nuestro análisis está referido a la recomposición interna de la clase burguesa. Y ello porque esta nueva fase de desarrollo capitalista implica tanto una creciente estratificación del sector industrial como una diferenciación progresiva entre las capas burguesas a través del desarrollo de una burguesía monopólica —nacional y extranjera— que hace más intolerable la situación de la pequeña y mediana burguesías.⁹

4 Se observa que aun cuando la participación latinoamericana en el total de la inversión norteamericana en el exterior disminuye del 39 al 20% en 1950-68, la inversión norteamericana en la industria latinoamericana crece a un ritmo algo superior (12.8%) al de la inversión realizada en los demás países donde operaban sus filiales (11.5%). Asimismo, en el periodo 1946-68, la inversión total norte-americana en América Latina crece casi cuatro veces, mientras la inversión industrial lo hace poco menos de nueve veces. Como consecuencia, la participación de las inversiones industriales en el total de las inversiones norteamericanas sube en este periodo, del 13.1 al 33.6%.

5 F. Fajnzylber, "La empresa internacional en la industrialización de América Latina", en J. Serra (comp.), *Desarrollo latinoamericano*, ed. Fonda de Cultura Económica, México, 1975.

6 R. Cinta, "Burguesía nacional y desarrollo" en varios, *El perfil de México en 1980*, ed. Siglo XXI, México, 1972, vol. III

7 Cepal, "La expansión de las empresas internacionales y su gravitación en el desarrollo latinoamericano", en su *Estudio económico de América Latina. 1970*, ONU, México, 1971.

8 Cepal, *Estudio económico de América Latina*, 1976, ONU, México, 1977

9 La acción del gran capital afecta de tres maneras las otras capas de la burguesía: en el mercado, en la captación de créditos y en el reparto de la

En este esquema, la modificación del bloque político dominante, en tanto que afirmación de la hegemonía de la fracción monopólica y deterioro de las relaciones interburguesas por la "marginación" de las fracciones no monopólicas, re-definió objetivamente los viejos parámetros en los que se había desarrollado el juego político entre las distintas fracciones y capas burguesas. En tal sentido, la redefinición apuntó a la profundización de las contradicciones y a la agudización de las pugnas interburguesas de modo de hacer cada vez más inviable la continuidad "funcional" del sistema de alianzas adoptado, hasta esos momentos, por la burguesía en su conjunto. El resultado de ese proceso habría de ser, en efecto,

la ruptura de lo que había sido, hasta entonces, la norma en América Latina: el "Estado de toda la burguesía" que favorecía la acumulación de todas las fracciones (aunque éstas aprovecharan desigualmente los beneficios puestos a su alcance). En su lugar, se crearía un nuevo Estado, preocupado fundamentalmente de los intereses de las fracciones monopólicas, que establece mecanismos selectivos para favorecer su acumulación. Como consecuencia, las demás fracciones burguesas deben subordinarse a la burguesía monopólica, quedando su desarrollo en estricta dependencia del dinamismo que logre el capital monopólico.¹⁰

Como sabemos, después de pasar por su época culminante a principios de la década de los sesenta, el proceso de industrialización asociado al capital imperialista se estancó en América Latina, al finalizar la década. La misma estructura dependiente de nuestra economía, con su inmensa sangría de plusvalía hacia las economías metropolitanas y su creciente superexplotación del trabajo, impuso barreras infranqueables al desarrollo industrial, desatando la crisis de acumulación capitalista local. Y junto con la crisis económica se agudizaron las contradicciones entre capital y trabajo, y en el seno de las propias clases dominantes. América Latina entró así en un proceso de crisis de las fuerzas políticas de la burguesía y del sistema de dominación imperialista en el continente. Sin embargo, esta crisis fue definida con más precisión a raíz de la irrupción del movimiento de masas en la escena política.

plusvalía generada. Véase para un análisis concreto, Marini, "El desarrollo industrial dependiente y la crisis del sistema de dominación", en su libro *El reformismo y la contrarrevolución: estudios sobre Chile*, ed. Era, México, 1976.

10 R. M. Marini, *La cuestión del Estado en las luchas de clases en América Latina*, trabajo presentado a la mesa redonda *Las fuerzas subjetivas del socialismo*, Yugoslavia, 1979.

*El ascenso del movimiento de masas*¹¹

Se indicaba, más arriba, que el fracaso de la burguesía ante las presiones del capital imperialista no ocurrió sin oposición de aquélla, sino que implicó, en un momento previo, la erupción de los últimos intentos desesperados del desarrollismo nacional. Expresados en una buena parte en los análisis que sobre la realidad económica elaboraron instituciones como la CEPAL, esos intentos se manifestaron, también, en el nacionalismo populista que, siendo de origen burgués, fue radicalizado por el liderazgo pequeñoburgués sobre el movimiento popular, evolucionando en muchos casos hacia posiciones antiimperialistas y provocando una serie de movimientos políticos y convulsiones sociales, en el transcurso de los años cincuenta. Cabe señalar, en ese contexto, fenómenos de amplia base popular, como la revolución boliviana del 52; el frustrado intento nacionalista de Arbenz, en Guatemala; la huelga de los obreros bananeros de Honduras, en 1954; el contra-golpe del general Lott en Brasil, en 1955, que consolidó la posición del presidente electo, J. Kubistchek; el movimiento popular que derrocó al dictador Pérez Jiménez en Venezuela, en el 58. Finalmente, con una perspectiva de clase distinta, el triunfo de la revolución cubana, en 1959.

A este progresivo ascenso de los movimientos de masas, cabe añadir algunos otros "ingredientes" que habrían de coadyuvar, en el transcurso de la primera mitad de los años sesenta, a su mayor desenvolvimiento. Entre ellos, mencionemos toda la constelación problemática que, como una bola de nieve, se deriva entre otras cosas de las tasas descendentes y casi erráticas del crecimiento económico, de las tasas más altas de inflación, de la implementación de las llamadas políticas de "estabilización" y de la aparición ya clara de las tendencias decrecientes de la absorción de fuerza de trabajo. A ello agreguemos, también, el proceso de proletarización de sectores significativos de la pequeña burguesía, la creciente pauperización de amplias capas obreras, la agudización de la lucha campesina y los efectos de la revolución cubana,¹² que desde sus inicios, y posteriormente, en virtud de sus cambios y transformaciones, da origen a una reformulación de las orientaciones político-ideológicas no sólo entre los "sectores populares", sino también entre la pequeña burguesía y, particularmente, entre las "capas intelectuales pequeñoburguesas que atravesaban [...] un periodo de reajuste en sus relaciones con la

11 Nos basamos en el libro colectivo compilado por V. Bambilra, *Diez años de insurrección en América Latina*, ed. PLA, Santiago, 1971.

12 La presencia de la revolución cubana alteró el cuadro de las opciones políticas. No es del caso tratar ahora la secuencia de las distintas alternativas que tuvo la influencia de la política inspirada en esta revolución: las alternativas de la guerrilla, las variantes en los movimientos insurreccionales, etcétera; sólo cabe destacar que la revolución cubana replanteó para el movimiento popular el problema de la revolución, y que las opciones de los distintos grupos frente a ella replantearon a la vez el problema de las alianzas de los grupos y clases sociales, como también el problema de las opciones en relación a las distintas fuerzas que en el campo de las fuerzas internacionales tenían vigencia. Los distintos procesos políticos latinoamericanos no pudieron eludir estas temáticas y trataron, de algún modo y con grandes variaciones, de dar respuesta a tales problemas.

burguesía, acentuando su desplazamiento hacia el campo popular".¹³

En ese esquema, se evidencian algunas cuestiones que conviene destacar. En primer lugar, el fracaso del desarrollo nacional autónomo, como esquema económico-social, y del populismo, como esquema político. En segundo lugar, la agudización y profundización de las luchas de clases, ya sea dentro de la misma burguesía o entre algunas fracciones de ésta y las clases dominadas. Y como consecuencia, en tercer lugar, la pérdida del liderazgo y control político-ideológico de los movimientos populares por parte de la burguesía. Esas condiciones objetivas condujeron a la necesidad de superar los viejos esquemas políticos del periodo populista, a la creación de un vacío político entre las clases dominadas y el movimiento popular, al establecimiento de nuevas condiciones para el florecimiento de un pensamiento y una acción revolucionarios y, finalmente, a una serie de cambios en el carácter reformista y reivindicacionista de los movimientos y las demandas populares.

Es por eso, precisamente, que el movimiento popular sigue, en el transcurso de los primeros años de la década de los sesenta, su propio curso ascendente, ya sea en unos casos empujando a los antiguos líderes populistas hacia posiciones más consecuentes o ya sea, en otros, sobrepasando las posiciones reformistas, hasta entonces dominantes, hacia posiciones políticamente más desarrolladas y entroncadas con el cuestionamiento del sistema en su conjunto. "Empiezan a plantearse y a llevarse a efecto los primeros intentos insurreccionales:"¹⁴

Obsérvese, en tal sentido, las distintas manifestaciones características del ascenso del movimiento de masas de este periodo. Cabe destacar, entre ellas, "el incremento notorio de los obreros en huelga por demandas vitales: 8 a 9 millones en 1957; 11 millones en 1958; 20 millones en 1959 y otro tanto en 1960; 21 millones en 1961 [...]"¹⁵ las crecientes movilizaciones populares contra las dictaduras, como la venezolana en 1958 o la resistencia popular al intento golpista en Brasil en 1961, que es seguido por la creciente expansión del movimiento obrero, campesino, estudiantil, la radicalización de sectores del ejército, así como el surgimiento de nuevas organizaciones de izquierda que planteaban la necesidad de la vía insurreccional. En ese marco se procesa, también, la constitución del movimiento guerrillero en Guatemala, en 1961-63; la formación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en 1961; el inicio de la guerrilla venezolana, en 1962; el nuevo carácter que asume el movimiento campesino colombiano, que

13 Véase la intervención de R. M. Marini en el seminario *Las fuentes externas del fascismo: el fascismo latinoamericano y los intereses del imperialismo*, México, SEPLA, julio de 1978. Reproducido en P. García, R. M. Marini, A. Cueva y T. Dos Santos, "La cuestión del fascismo en América Latina", Cuadernos *Políticos*, n. 18, 1978.

14 V. Bambilra, op. cit., p. 30.

15 P. González Casanova, *Imperialismo y liberación en América Latina*, ed. Siglo XXI, México, 1978, p. 263.

culmina en 1964 con los acontecimientos de Marquetalia y que es continuado por las guerrillas rurales; el movimiento campesino de la sierra sur peruana, liderado por Hugo Blanco, y el surgimiento, poco después, de las guerrillas del MIR peruano, conducidas por De la Puente y Lobatón, en 1965; y el ascenso de la lucha obrera y popular en Chile, a partir de 1967, y la creación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

En estas regiones reconocemos como exigencia primaria la necesidad de progreso económico y social, y la cooperación de los gobiernos y pueblos . . . No obstante, un componente esencial de su progreso es el mantenimiento de la estabilidad interna, y en esta función es también esencial el papel de las fuerzas militares y otras fuerzas de seguridad. Nuestro objetivo en este caso es suministrar los medios para la formación de instituciones militares locales, con el apoyo y cooperación de las poblaciones nativas, que las protejan contra la intrusión encubierta desde el exterior y contra la subversión interna destinada a crear disidencias e insurrección".

Robert McNamara
14 de junio de 1961

La segunda mitad de la década de los sesenta contempló un nuevo impulso de las luchas populares en el continente. Este nuevo ascenso se caracterizó por una creciente radicalización de amplios sectores del campo popular, a cuya cabeza se colocó la clase obrera. El agotamiento de un modelo de reproducción del capital y su transición hacia una nueva forma agudizaron las contradicciones entre el capital y el trabajo, al descargar sobre las masas trabajadoras el peso de la crisis. Fue bajo estas condiciones que, desarrollándose la presencia en la escena política de los pobres del campo y de la ciudad, y de la pequeña burguesía depauperada, el proletariado industrial se convirtió en el referente social y político de la lucha popular.

En algunos países, especialmente los del Cono Sur del continente, la oleada ascendente de la lucha de masas entroncó con un arreciamiento de diferencias en el seno de las clases dominantes, con lo que se abrieron amplias posibilidades para que su lucha potenciara una crisis del sistema de dominación.

El hecho de que la crisis de dominación en estos países, especialmente, no haya madurado en crisis revolucionaria, en crisis orgánica de la formación social, se debió en buena parte a las orientaciones imperantes en el seno del movimiento de masas, que lo limitaron en la definición de una estrategia de poder. Pero, igualmente, se debió también a la fuerza desplegada por las clases dominantes, con las Fuerzas Armadas a la vanguardia, para restaurar plenamente su dominación.

La nueva estrategia norteamericana: la doctrina de la contrainsurgencia

Aun cuando la expansión económico-militar norteamericana se desarrolla a partir de la posguerra, con la creación del Plan Marshall, es sólo bajo el gobierno demócrata de Kennedy cuando dicha expansión se realiza en el plano militar, bajo la forma de una ofensiva generalizada del imperialismo.¹⁶

Su principal motivación es el hecho de que Estados Unidos, en tanto que cabeza indiscutible del campo capitalista, se ve enfrentado a una serie de procesos revolucionarios en distintas partes del mundo, como Argelia, Cuba, Congo, Vietnam, que arrojan resultados diferentes pero que hacen temblar la estructura mundial de la dominación imperialista. Esto se acompaña de la modificación de la balanza de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética que implica un mayor equilibrio entre ambos.¹⁷

Si, hasta finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, el enfoque político-militar

16 M. Klare y N. Stein, *Armas y poder en América Latina*, ed. Era, México, 1978.

17 R. M. Marini, "La cuestión del fascismo...", cit., p. 22.

norteamericano se fundamentaba en el supuesto de una posible amenaza externa por parte del bloque socialista, en el curso de la década de los sesenta esta política tuvo que ser revisada, no sólo porque, al llegar la carrera armamentista a la etapa nuclear, variaban los términos de un posible conflicto entre las dos potencias, sino también porque ahora se debía enfrentar una amenaza mucho más concreta, que provenía del interior de los propios países dependientes, a través de los intentos insurreccionales capaces de subvertir el orden vigente. Así, paulatinamente, la política exterior norteamericana abandonó la estrategia de la "reacción masiva y global" en un enfrentamiento directo con la Unión Soviética, sustituyéndola por otra nueva: la estrategia de la contrainsurgencia, capaz de responder al reto revolucionario donde quiera que éste se presentara.

Estados Unidos definió la estrategia de la contrainsurgencia como el conjunto de medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas tomadas por el gobierno para derrotar la insurgencia subversiva de origen comunista. Dos eran sus objetivos básicos: El primero, promover en el plano económico-social una política reformista y de ayuda a los países dependientes; la Alianza para el Progreso (ALPRO), creada en 1961, tenía por objeto llevar a cabo esa política. El segundo objetivo era realizar, en el plano militar, una política represiva que detuviese el avance del movimiento de masas y que contuviese cualquier amenaza insurreccional.

Si, en el plano económico-social, las metas de la nueva estrategia consistían en estimular determinados tipos de reforma, que sin poner en riesgo el régimen capitalista sirvieran para prevenir —desde la perspectiva norteamericana— la "cubanización" de América Latina, en el plano militar, las metas consistían en capacitar a los ejércitos latinoamericanos para la compleja tarea de enfrentar a un enemigo no siempre bien diferenciable, diluido entre la población, y aplastar los movimientos insurreccionales.

Así, la nueva estrategia militar norteamericana para América Latina se concretó en tres elementos: a] la elaboración de una doctrina antinsurreccional fundada en los principios de la "Seguridad Nacional"; b] la modernización tecnológica de los ejércitos nacionales; y c] los intentos de coordinación de los distintos ejércitos nacionales del continente.

En todo caso, cabe destacar los aspectos centrales de la doctrina de la contrainsurgencia: la concepción de la política, la concepción del enemigo y la concepción acerca del restablecimiento de la democracia burguesa.

a] En la sociedad burguesa, "la Lucha política tiene como propósito derrotar al contrincante, pero éste sigue existiendo como elemento derrotado y puede, incluso, actuar como fuerza de oposición. La

contrainsurgencia [...] ve al contrincante como el enemigo que no sólo debe ser derrotado sino aniquilado, es decir, destruido, lo que implica ver a la lucha de clases como guerra y conlleva, pues, la adopción de una táctica y métodos militares de lucha". Se trata, en efecto, de la aplicación del enfoque militar a la lucha política.

b]Si en la sociedad burguesa el contrincante es visto como parte constitutiva de la sociedad, "la contrainsurgencia considera al movimiento revolucionario como algo ajeno a la sociedad en que se desarrolla; en consecuencia, ve el proceso revolucionario como subversión provocada por una infiltración del enemigo [...] que provoca en el organismo social un tumor, un cáncer, que debe ser extirpado, es decir eliminado, suprimido, aniquilado".

c]Finalmente, "la contrainsurgencia, al pretender restablecer la salud del organismo social infectado, es decir, de la sociedad burguesa bajo su organización política parlamentaria y liberal, se propone explícitamente el restablecimiento de la democracia burguesa, tras el periodo de excepción que representa el periodo de guerra". En ese sentido, "la contrainsurgencia no pone en cuestión en ningún momento la validez de la democracia burguesa, tan sólo plantea su limitación o suspensión durante la campaña de aniquilamiento".¹⁸

En resumen, la estrategia de la contrainsurgencia recurre a los militares latinoamericanos y les asigna diversas tareas, según la realidad concreta de cada país: la función tradicional de respaldo represivo a aquellos regímenes donde las fuerzas políticas de la burguesía aún son capaces de mantener y asegurar el sistema capitalista de dominación; o la función de pilares y cabeza del Estado, surgiendo así los Estados militares de excepción, en aquellos países donde las fuerzas de la burguesía no son capaces de resolver la crisis de dominación burguesa.

La crisis mundial del capitalismo

Junto al estancamiento de la industrialización en América Latina, a fines de la década de los sesentas, comienza a desarrollarse también la actual crisis de acumulación capitalista en los países industrializados. Los datos que ilustran esta situación, y de los cuales es posible extraer algunas conclusiones respecto a la forma en que el imperialismo diseñó posteriormente su recuperación, son los siguientes: la tendencia decreciente de la tasa de ganancia frenó, en la segunda mitad de los sesentas, la capacidad de autofinanciamiento que hasta entonces habían mostrado las corporaciones multinacionales, traduciéndose en una obligada salida de éstas a los mercados de dinero y de capital.

18 Loc. cit.

La tasa promedio de ganancias de las corporaciones no financieras en 1965 era de casi 17%; en el 67-68 se redujo al 14% y para 1970 al 9%. La inflación de la década logró elevarla hasta poco más del 10% en 1973, reanudando su caída al 8% en 1974 y al 5% en 1975. Es decir, desde 1968, la tasa de ganancia del capital productivo ha estado por debajo de la tasa de interés. Al mismo tiempo, la demanda de capital y dinero encareció el crédito y se estimuló la inflación mundial juntamente con la recesión.

Tras esta situación, nuevos problemas debió enfrentar el imperialismo cuando la corta expansión mundial capitalista de 1971-73 se vio acompañada de un violento encarecimiento en el precio de las materias primas, particularmente de los energéticos.

La dominación imperialista a escala mundial se vio todavía más agravada a partir de 1973, cuando la economía mundial entra en un agudo ciclo recesivo —el más agudo desde la depresión de los años treinta— que coloca al sistema de dominación imperialista en una crisis, no sólo económica sino también política. Fuertes contradicciones agitaron a las burguesías de Estados Unidos, Europa y Japón; sus partidos e instituciones políticas perdieron legitimidad; la clase obrera se movilizó, agudizando la lucha de clases.¹⁹ En los países dependientes y semicoloniales, la dominación burguesa e imperialista también enfrentó una situación crítica.

En estas condiciones, el imperialismo inició un repliegue ordenado que le permitiera pasar a una contraofensiva y de-tener el avance revolucionario. Este repliegue consistió en afirmar su dominación en las áreas estratégicas básicas, desencadenando la ofensiva contrarrevolucionaria en ellas. Al mismo tiempo buscó resolver la crisis económica, exportando sus costos a los países dependientes.

En este sentido, tres fueron los mecanismos básicos que empleó la burguesía imperialista para acrecentar la extracción de plusvalía de las economías dependientes:

a] la especulación financiera, mediante el otorgamiento de préstamos y créditos con una alta tasa de interés a los gobiernos y empresas de los países dependientes;

b] el deterioro de los términos de intercambio; es decir, fijar un alto y creciente precio a los bienes y tecnología producidos en los países industrializados, a la vez que se pagaba un bajo precio a los bienes producidos y/o extraídos en los países dependientes;

¹⁹ Recuérdese a título de ejemplo, entre otras cosas, el movimiento de mayo del 68, el nuevo impulso de las luchas obreras en Francia, Inglaterra e Italia, la derrota del fascismo en Portugal, Grecia y España, los avances de la izquierda en Francia e Italia, el recurso burgués a la socialdemocracia en varios países europeos, el hundimiento del gaullismo y la búsqueda de una nueva política por parte de la burguesía francesa, las luchas internas con claros visos de violencia entre las "élites políticas" norteamericanas (el caso Watergate y la destitución-renuncia de Nixon), japonesas (la dimisión de Tanaka) y alemanas (la dimisión de Brandt) o también, la crisis permanente italiana, donde se pone en tela de juicio la hegemonía democristiana a la vez que el PCI adquiere cada vez mayor fuerza política.

c]la superexplotación del trabajo en los países dependientes, permitiendo a las empresas que operan en ellos tener una fuerza de trabajo barata para incrementar así la tasa de plusvalía.

Estas dinámicas, a través de las cuales el imperialismo hace recaer sobre nuestros países una parte sustancial de los costos de la crisis económica del capitalismo mundial, exige a éste lanzar una ofensiva política para imponer regímenes militares fuertemente represivos y absolutamente entregados a los despiadados requerimientos económicos del capital monopólico internacional. Esto es doblemente necesario en un continente como el latinoamericano, donde las economías locales enfrentan una profunda crisis de acumulación.

El Estado de contrainsurgencia

En *este* nuevo marco, el Estado latinoamericano sufre una rápida metamorfosis consistente en que sus elementos de sustentación, los aparatos militares y represivos, emergen desde dentro del Estado para convertirse en la cabeza de éste. Esta situación difiere totalmente del fascismo europeo, en el que el Estado fue tomado por asalto, desde fuera, por el movimiento fascista, y doblegado.

En América Latina, los aparatos militares y represivos se constituyen, en la etapa actual, ya no sólo en la columna vertebral del Estado, sino también en su cerebro; es decir, en el centro de articulación y dirección del sistema de dominación en su conjunto. Esto es posible no sólo por el desarrollo del gran capital, que agudiza las pugnas interburguesas y la lucha de clases en general, sino también porque obedece a la estrategia imperialista de mantener bajo su control zonas estratégicas básicas.

Además, a diferencia de la ola contrarrevolucionaria que asoló a los países europeos hace más de cuarenta años, la contrarrevolución burguesa latinoamericana no ha contado con una base de apoyo sustraída de las filas del pueblo. Esta situación se debe a la extrema polarización social que provocan el nuevo modelo de acumulación y la superexplotación del trabajo en que éste se funda. Así, la misión contrarrevolucionaria, confiada a los aparatos represivos, consiste en sustituir a la antigua élite política que dirigía el Estado, a la vez que desarrollar una nueva forma de dominación basada en la llamada doctrina de la Seguridad Nacional. Ésta —como ya se indicó— postula aplicar la concepción de la *guerra interna* a quienes considera como agentes "externos" a la sociedad nacional; en este caso, los núcleos revolucionarios.

Para llevar adelante sus tareas, el poder real del Estado de la contrainsurgencia pasa a descansar en

la existencia de dos ramas centrales de decisión dentro del Poder Ejecutivo. De un lado, la rama militar, constituida por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que expresa a la institución militar al nivel de la toma de decisiones y que reposa sobre la estructura vertical propia a las Fuerzas Armadas; el Consejo de Seguridad Nacional, órgano deliberativo supremo, en el que se entrelazan los representantes de la rama militar con los delegados directos del capital, y los órganos del servicio de inteligencia, que informan, orientan y preparan el proceso de toma de decisiones. De otro lado, la rama económica, representada por los ministerios económicos, así como las empresas estatales de crédito, producción y servicios, cuyos puestos claves se encuentran ocupados por tecnócratas, civiles y militares. Así, el Consejo de Seguridad Nacional es el ámbito donde confluyen ambas ramas, entrelazándose, y se constituye en la cúspide, el órgano clave del Estado de contrainsurgencia.

Ésta es pues,

la estructura real del Estado de contrainsurgencia, que consagra la alianza entre las Fuerzas Armadas y el capital monopólico, y donde se desarrolla el proceso de toma de decisiones fuera de la influencia de las demás instituciones que componen el Estado burgués clásico, como lo son el Poder Legislativo y Judicial.²⁰

Como quiera que sea, la ofensiva contrarrevolucionaria iniciada en marzo de 1964 con el golpe militar que derrocó al régimen populista de Goulart en Brasil, alcanzó su punto culminante en el periodo 1973-76, cuando los países del cono sur se cubren de dictaduras militares. Con ella, el capital monopólico nacional y el extranjero imponen una derrota que frena el ascenso del movimiento de masas observado en esos países, crean condiciones de facto para superar la crisis política del conjunto de las fuerzas burguesas y establecen las bases para reestructurar el modelo de acumulación y superar la crisis del capitalismo dependiente. Sin embargo, la existencia de las dictaduras militares como forma del Estado de contrainsurgencia no se generaliza al conjunto de los países, las fuerzas políticas de la burguesía son capaces de asegurar una relativa estabilidad del sistema de dominación capitalista dependiente bajo distintas variantes de democracia burguesa.

20 R. M. Marini, "La cuestión del Estado...", cit

CONTRARREVOLUCIÓN Y DEMOCRACIA

El ciclo contrarrevolucionario de más de doce años en el que surgieron los Estados de contrainsurgencia fue enmarcado en otro contexto. En efecto, la profundización de la crisis internacional del capitalismo y de la hegemonía del capital norteamericano, las nuevas modificaciones en el aparato productivo de los países dependientes, la reformulación de las alianzas dentro de la burguesía y la generación de un nuevo flujo en la lucha de clases de estos países, fueron gestando las bases objetivas para la readecuación de la política imperialista hacia América Latina y para la aparición de las nuevas presiones sociopolíticas en el seno de la sociedad latinoamericana, que habrían de cristalizar en una nueva alternativa de dominación: *el proyecto burgués de institucionalización de la contrarrevolución*.

Crisis capitalista y política imperialista

Como ya se indicó, después del periodo de auge más o menos continuo desde 1949, la economía capitalista entró en una fase depresiva en 1967. A diferencia de las anteriores crisis, la actual presenta rasgos propios y nuevos: su duración definitivamente prolongada, el descenso de la tasa de crecimiento acompañado de un fuerte incremento en los precios, dando origen a la llamada "estagflación",²¹ el crecimiento acelerado en la magnitud del déficit fiscal, el ascenso a niveles sin precedentes de la desocupación y la subutilización de la capacidad instalada como consecuencia directa de la recesión.²² A ello se agrega además la sincronía entre los ciclos de las economías "industrial-desarrolladas", debido a la interconexión de los capitales y a la importancia de los intercambios para cada una de esas economías.

Estos hechos constituyen elementos de una crisis profunda del sistema, no sólo porque son la expresión madura de una tendencia establecida a lo largo de la evolución de los últimos treinta años, sino porque, además, deben ligarse a las transformaciones cualitativas ocurridas en la lucha de clases a nivel mundial, a partir de 1967-68, que dan lugar a un nuevo proyecto imperialista que busca dar respuesta a la crisis.

21 Cabe indicar que este fenómeno no sólo es pernicioso para el nivel de los asalariados sino que además socava la estabilidad de los circuitos económicos capitalistas, desencadenando la espiral de los precios y salarios, trastornando los sistemas de pago y de crédito, y volviendo imprevisibles los efectos de inversión a largo plazo, precisamente cuando las características actuales del progreso técnico exigen un cálculo de rentabilidad a largo plazo.

22 Véase, entre otros, T. Dos Santos, *Imperialismo y dependencia*, ed. Era, México, 1979; M. Castells, *La crisis económica mundial y el capitalismo americano*, ed. Laia, Barcelona, 1978; L. Maira y C. Rico, "La política latinoamericana de la administración Carter", *Cuadernos Semestrales*, n. 5, 1979; y E. McCaugham (ed.), "1968-78: con-tours of Crisis", *NACLA Report of the Americas*, n. 5. 1978.

Como derivación de la misma crisis, la hegemonía estadounidense se vio arrastrada a un proceso de relativo cuestionamiento. De una situación de monopolio nuclear y de liderazgo indiscutible en el campo capitalista, desde fines de la segunda guerra mundial, Estados Unidos pasa a enfrentar, desde comienzos de la década de los setentas, un nuevo panorama, en el que su posición es, en cierta medida, declinante.

Varios fenómenos intervienen en dicho proceso. En lo que respecta al campo imperialista capitalista, ha ocurrido una disminución relativa de la posición norteamericana frente al expansionismo europeo y japonés, lo que da lugar a transformaciones en el sistema internacional de poder y a un aumento de “la sensibilidad de las políticas nacionales ante las iniciativas tomadas por otros gobiernos más allá de sus fronteras o aun por participantes no nacionales en el juego económico mundial”.²³

En otro orden de cosas, el fortalecimiento del campo socialista y el impacto del proceso de distensión han reducido la fuerza de la vieja imagen de un inminente peligro externo de "origen comunista", apoyando así las tendencias "autonomistas" dentro del mundo capitalista.

Finalmente, destacan los efectos derivados de los cambios ocurridos en la política exterior de los países dependientes. Cabe mencionar entre ellos la ofensiva por la instauración de un nuevo orden económico internacional que incorporó sus demandas en las negociaciones internacionales. Éstas se expresarían de manera particular, desde 1973, en la política de los países miembros de la OPEP, en la radicalización económica del movimiento de los No Alineados a partir de la Conferencia de Argel y la celebración del sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU en 1974. Desde otro ángulo, y con consecuencias políticas más precisas y profundas, deben mencionarse la derrota político-militar norteamericana en el sudeste asiático y el avance de las fuerzas revolucionarias sobre todo en África, que se expresan en el derrocamiento del régimen de Haile Selassie en Etiopía y, sobre todo, en las victorias revolucionarias en Mozambique y Angola, así como la victoria político-militar en Zimbabwe y el repunte de la lucha popular en Sudáfrica.

Este conjunto de procesos

Llevaría a amplias capas de dirigentes norteamericanos a tener la sensación de que estaban a punto de perder otro continente. Las expresiones políticas se fueron constituyendo, por esta vía, en motivos adicionales de preocupación para la diplomacia norteamericana. De esta manera [...] la propia realidad impondrá a la diplomacia norteamericana un nuevo orden de prioridades derivado, en primer

23 Maira y C. Rico, art. cit., pp. 18 ss.

término, del conjunto de nuevas realidades que le plantea "el fin de la posguerra", frase en la que se pueden resumir los acontecimientos recientes.²⁴

De ese modo, la crisis capitalista internacional y la crisis de la hegemonía norteamericana condujeron a una serie de replanteamientos y readecuaciones de la estrategia norteamericana, que se expresarán en varios planos: la redefinición de la hegemonía norteamericana en términos de una "hegemonía compartida" con las demás potencias imperialistas, la polarización de las relaciones en el campo socialista y el intento de desconflagración o enfriamiento de las zonas periféricas "calientes". Esta nueva concepción pasa a descansar en el supuesto de que Estados Unidos debe "compartir", hegemónizándola, la dirección económica, política y militar del mundo capitalista, con las potencias europeas y el Japón. Se trata pues, de limar las contradicciones entre las burguesías imperialistas mediante la coordinación conjunta de sus políticas. La tarea asignada es asegurar las áreas de dominación imperialista, frenando el avance revolucionario, a la vez que impulsar las líneas de solución de la crisis capitalista mundial. Todos estos elementos adquirieron su posibilidad de objetivación con la llegada de James Carter a la presidencia del gobierno norteamericano y, con él la concepción político-ideológica de la Comisión Trilateral.²⁵

Institucionalización y "democracias viables"

Con respecto a América Latina, la táctica del gobierno de Carter se expresa en el proyecto de las llamadas "democracias viables". Este proyecto propone, en lo fundamental, dar una mayor flexibilidad política al tratamiento de las contradicciones interburguesas y a las contradicciones del conjunto de la burguesía con las clases explotadas, a través de una nueva institucionalidad. Es decir, se propone reconstituir sobre bases más estables la dominación burguesa, por medio de una "apertura" política que, sin embargo, preserve lo esencial del Estado de contrainsurgencia.

Así, las readecuaciones tácticas de la política norteamericana en América Latina habrían de consistir en una serie de presiones sobre las dictaduras militares para que, limitando sus excesos represivos, abrieran cauce a ciertas instituciones de tipo democrático, y permitieran un mayor juego entre las fracciones burguesas, e incluso de sectores del movimiento de masas controlados por el Estado, en el marco de la militarización de éste, y, por lo tanto, manteniendo a las Fuerzas Armadas como pilar y

24 *Ibid.*

25 Véanse los documentos centrales acerca de lo que es, e implica al nivel de las formulaciones políticas alternativas, la Comisión Trilateral, en *Cuadernos Semestrales*.

cabeza del Estado y a la doctrina de Seguridad Nacional como guía central de la acción estatal. Estas readecuaciones se contextúan, así, en una agregación al Estado de nuevos instrumentos de dominación ideológica que, encubiertos bajo la apariencia de formas democráticas restringidas de Estado, faciliten el manejo de las contradicciones de clase, fortalezcan la dominación burguesa y contribuyan a una mayor estabilidad del Estado de contrainsurgencia.

Estas formas democráticas serían, sin embargo, más o menos amplias, según la realidad concreta determinada por la misma lucha de clases y el grado de crisis de la dominación burguesa en cada país. Llevado a la práctica, el proyecto de las "democracias viables" estaría implicando que el gobierno norteamericano:

a) apoyará, en los países donde existe un sistema de dominación burguesa de mayor estabilidad, el mantenimiento de algunas formas democráticas burguesas de Estado y gobierno: sistema electoral, parlamento, autonomía del poder judicial, existencia legal de los partidos políticos burgueses, legalidad para la organización restringida de masas. Dentro de esta "democracia" actuarían paralelamente los cuerpos militares de seguridad, encargados de impedir toda expresión de lucha de las masas trabajadoras y de las fuerzas revolucionarias. Tal forma de "democracia burguesa" se estaría implementando en casos como los de Colombia, Costa Rica, Venezuela, etcétera;

b) apoyará, en los países donde el Estado democrático burgués no asegure plenamente la estabilidad de la democracia burguesa, la introducción paulatina de formas de participación institucional de las distintas fuerzas burguesas y la tendencia a dar un margen de organización subordinada a sectores del movimiento de masas, a la vez que se reprimen las expresiones políticamente autónomas del proletariado y de los demás sectores de las clases dominadas.

Sin embargo, pese a estas readecuaciones tácticas, América Latina constituye una de las regiones donde menos avances ha mostrado la actual estrategia norteamericana y en donde, por el contrario, más rápidamente se han hecho evidentes los límites del proyecto imperialista impulsado por el gobierno de Carter. En efecto, inscrito dentro del nuevo reordenamiento de fuerzas, el subcontinente se ha convertido en una de las zonas que, con mayor rapidez, ha cambiado de signo en cuanto a las modalidades con que se desarrolla la lucha de clases. Así, en 1977, cuando Carter accede a la Casa Blanca, no hacía más de un año que se había producido el golpe militar en Argentina, proceso que cerraba el ciclo ascendente de la contrarrevolución burguesa en el cono sur. Este hecho hizo suponer, de manera generalizada, el inicio de un largo periodo de reflujo y desorganización de las fuerzas populares. Desde la perspectiva imperialista, estas condiciones permitían el inicio de una nueva fase

dentro del periodo contrarrevolucionario; es decir, una fase nueva caracterizada por la creación de formas de dominación más flexibles y la aparición de una mayor base social de apoyo.

Sea como fuere, el hecho es que el proyecto imperialista enfrentó una pronta recuperación de las luchas populares: 1977 marca el inicio de un nuevo ascenso de las luchas de masas en la mayoría de los países latinoamericanos. La incapacidad de las políticas del imperialismo y de las burguesías locales para absorber este nuevo proceso, dentro del marco de sus proyectos políticos, es lo que permite entender la lentitud y los fracasos que enfrenta la estrategia norteamericana.

Como quiera que sea, el esquema subyacente en la estrategia impulsada por la política Carter, busca superar los problemas inherentes a la fase militar de la contrainsurgencia a la vez que las debilidades de la dominación burguesa en América Latina, tratando de conformar, por esa vía, un nuevo esquema de fuerzas a nivel internacional, en el que a las llamadas zonas periféricas les corresponde el papel de *regiones congeladas a la lucha de clases*. Es por ello que los principales puntos de atención en la estrategia norteamericana se centrarán en remozar la fachada de las dictaduras militares y su repudiada política de violación abierta de los derechos humanos; dar un margen de solución a las pretensiones nacionalistas panameñas en torno a la zona del Canal; definir un nuevo status para Puerto Rico; y neutralizar la influencia de la primera revolución proletaria y socialista en el continente —Cuba—y su consecuente internacionalismo proletario.

Asimismo, la necesidad de las dictaduras militares y de las fracciones hegemónicas de la burguesía local de readecuar sus políticas fue generada por las nuevas contradicciones surgidas durante la fase militar de la contrarrevolución. En efecto, los avances en la implementación de un nuevo modelo de acumulación, en los países latinoamericanos, exacerbaron las disputas interburguesas, a la vez que, como ya se apuntó, no se lograba asentar sólida y definitivamente el control sobre el movimiento de masas, y menos liquidarlo. Así, ni las fracciones dominantes encontraban condiciones adecuadas para resolver sus diferencias económico-políticas en el marco institucional inicial de la contrarrevolución, ni ésta se consolidaba para un largo periodo. Con el objeto de resolver estos dos problemas, las Fuerzas Armadas y los sectores más lúcidos de la burguesía monopólica se dieron a la tarea de plantear modificaciones al esquema de dominación vigente.

Pese a ello, sin embargo, no siempre los proyectos de los sectores dominantes, en los países sometidos a dictaduras militares, coincidieron y caminaron al mismo tiempo que los proyectos impulsados por el imperialismo. Muchas veces, fue más bien el desfase la tendencia dominante. Y esto fue cierto en los primeros meses del gobierno de Carter, cuando el impulso al proceso de

"democratización" enfrentó dos hechos. Por una parte, que las clases dominantes no eran capaces de crear alianzas estables, dadas las diferencias estructurales entre las distintas fracciones burguesas respecto al modelo de acumulación que debería ser implementado. Y, por otra, la creciente autorización y radicalización del movimiento de masas. Así, en la medida que el imperialismo comprobó que su política desnudaba el deterioro del consenso interburgués y lo exponía a la creciente activación de la lucha de masas, fue readecuando sus presiones —sin dejar de insistir en ellas— a los plazos y modalidades que las propias dictaduras militares pudieran establecer.

De ese modo, si Carter, en el primer momento de su gestión, se propuso asegurar la dominación imperialista, eliminando factores críticos en sus zonas de influencia básica para concentrar sus fuerzas en regiones estratégicas, más tarde tuvo que enfrentar las dificultades propias de la situación latinoamericana, lo que se tradujo en una creciente incapacidad para lograr una política sistemática y coherente. Así, el gobierno Carter tuvo que enfrentar una encrucijada: dar marcha atrás en algunos terrenos importantes y dejar sin solución problemas que tienen un interés vital para el mismo imperialismo.

En efecto, después de haber pregonado el respeto a los derechos humanos y de ejercer presiones para que las dictaduras militares pusieran en camino la institucionalización de la contrarrevolución, el gobierno Carter no encontró las formas idóneas para participar activamente en la conducción de este proceso. Al dejar en manos de las dictaduras militares y de las fracciones burguesas hegemónicas la tarea de llevar adelante la implementación de las "democracias viables", el imperialismo perdió una parte de los dividendos que se proponía obtener en un principio.

Es por eso que, si bien el proceso de institucionalización se generalizó y entró en marcha —con avances y retrocesos—, no ha logrado plasmarse en un proyecto político con límites precisos. Asimismo, el proyecto norteamericano ha debido enfrentar propuestas alternativas que presentan una mejor definición de la transición a las "democracias viables" en algunos países. Es el caso de la socialdemocracia internacional. En efecto, al plantear ésta el desarrollo de un sistema de dominación consensual, a través de una serie de concesiones económicas y políticas a las clases dominadas, la subordinación de la pequeña burguesía y la clase obrera a la dirección burguesa, el debilitamiento político de las posibilidades de conformación de un bloque social revolucionario y la aplicación de una política represiva más selectiva, las tendencias socialdemócratas han avanzado significativamente en el juego político latinoamericano. Y ello tanto más en la medida en que sus banderas liberales han sido capaces de arrastrar a fuerzas de la oposición burguesa y a sectores

vacilantes de la izquierda latinoamericana, a la vez que quebrar la unidad política del movimiento de masas y abrir un cierto espacio político para la institucionalización de las dictaduras.

Como quiera que sea, la puesta en marcha o el simple anuncio de reformas en los diferentes países, abrió campo a las contradicciones que subyacían en el seno de la sociedad. Lejos de ser un proceso idílico, la institucionalización de la contrarrevolución se ha convertido en una lucha encarnizada entre los distintos sectores, fracciones y clases sociales. Así, mientras las tensiones y pugnas entre las fracciones burguesas han crecido aceleradamente, la represión al movimiento de masas se ha extendido, con medidas legales o sin ellas, en tanto única vía de contención de las luchas populares. Es por eso que las ilusiones formadas en torno a una supuesta política de respeto a los derechos humanos y de un viraje a la democracia burguesa se han desvanecido con la misma premura que fueron creadas e impulsadas por las burguesías imperialistas y locales.

Lucha de clases y democracia

Así, el proceso de institucionalización mostró desde sus inicios el restringido alcance de sus reformas políticas. En efecto, si la institucionalización persiguió, fundamentalmente, consolidar el dominio burgués en general y la hegemonía del gran capital en particular, apuntalar el aparato de contrainsurgencia como columna vertebral del Estado, obtener una imagen menos conflictiva para los fines de la dominación interna y asegurar la paz orgánica y la estabilidad social que demandaba el nuevo modelo de acumulación, el logro de estos objetivos supuso el sometimiento del movimiento de masas y la subordinación de los sectores burgueses desplazados del poder. Sin embargo, es del primer factor de donde nacen las principales dificultades para el avance de dicho proceso. Contrariamente a las expectativas visualizadas por la estrategia imperialista, y a contrapelo de los deseos de la burguesía, la primera fase de la contrarrevolución burguesa en América Latina no logró culminar uno de sus objetivos básicos: imponer una profunda desmovilización al movimiento de masas, desarticular sus organizaciones gremiales y políticas y liquidar sus vanguardias.

Por lo contrario, a partir de 1977, el conjunto de países latinoamericanos asiste al inicio de un nuevo flujo de activación obrera y popular que, si bien mantiene ritmos y condiciones muy diferentes en cada país, contemplado en su perspectiva general presenta un carácter sostenido. Pero, además de ello, y sobre todo en el curso de 1979, este flujo, amén de generalizarse y adquirir una nueva extensión social, ha mostrado nuevas características: la aparición de la clase obrera como eje y motor de las

movilizaciones populares, sobre todo en Argentina, Bolivia, Brasil y Chile; y el desarrollo de una creciente radicalización, que incluso se convierte en la implementación de formas armadas y militares de Lucha de masas, como es el caso centroamericano y, particularmente, de Nicaragua y El Salvador. De esta manera, "por abajo y por la izquierda" se ha cuestionado la posibilidad real de la institucionalización de la contrarrevolución burguesa.

Por su parte, las contradicciones y pugnas interburguesas también han dificultado la instauración de las "democracias viables". Las disputas por mayores cuotas de poder y los desacuerdos sobre las formas que debe asumir el proceso, en no pocas ocasiones han retrasado el parto. Algunos sectores de la oposición burguesa han tratado de capitalizar la fuerza del movimiento de masas, endureciendo sus posiciones y planteándose como elemento alternativo a los militares, en tanto que conductores del proceso de institucionalización.

Cabe, por lo tanto, encauzar el análisis hacia las limitaciones que, en el contexto de la actual lucha de clases, enfrenta el proceso de democratización.

Los acontecimientos revolucionarios de Nicaragua confirman la entrada en una nueva fase de la lucha de clases en América Latina. El periodo más oscuro de la contrarrevolución burguesa ha quedado atrás. El auge de la lucha de masas acerca la crisis de la dominación burguesa y pone a la orden del día la implementación de formas superiores de lucha. En este aspecto, la particularidad de la coyuntura actual radica en el hecho de que son las condiciones de la misma contrarrevolución las que hacen que tal requerimiento aparezca ante las masas como un problema real: para obtener sus reivindicaciones, se hace necesario enfrentar no sólo la lucha económica sino, también, la lucha política en sus diferentes aspectos y niveles. Paralelamente, la tendencia a la autonomización de las masas respecto de la conducción burguesa y pequeñoburguesa corre al lado de los crecientes esfuerzos para alcanzar la unidad orgánica de las fuerzas obreras y populares. Así, aunque de manera desigual, pero como una tendencia creciente, se observa el paso de la lucha "puramente económica" a la lucha política, de las huelgas y movilizaciones aisladas a la lucha generalizada. Obviamente, tales tendencias no surgen espontáneamente de la situación contrarrevolucionaria —si bien ésta es su base objetiva— sino que emergen como resultado del proceso de maduración política de las masas trabajadoras y de sus propias organizaciones.

En ese marco, el proyecto burgués de institucionalizar la contrarrevolución —encerrando al movimiento de masas, incorporando a algunos sectores, sobre todo de la oposición burguesa y pequeñoburguesa, y eliminando los aspectos más conflictivos de las relaciones políticas— no ha

caminado fácilmente. Aun cuando, en algunos países, se han producido pasos importantes, el auge de la lucha de masas ha *hecho* más difícil su control. A lo largo de los últimos dos o tres años, se ha observado una serie de contradicciones que marcan el paso zigzagueante de la institucionalización. Este hecho se ha traducido, consecuentemente, en que, en ninguno de los casos, el proyecto haya sido definido en lo fundamental. Sus avances han sido demasiado lentos y, en el marco de la profunda crisis económica, cada vez más encuentran nuevas dificultades para alcanzar sus objetivos.

Así, en algunos países, como Argentina, Chile y Uruguay, donde las acciones de contrainsurgencia se han aplicado en gran escala, las fracciones hegemónicas de la burguesía se encuentran trabadas en la primera fase de la contrarrevolución, sin poder avanzar efectivamente hacia una nueva institucionalidad. En otros casos, como Ecuador y Perú, el proceso manifiesta mayores avances, pero no por ello deja de manifestar su carácter contradictorio y sus limitaciones para asegurarse el movimiento de masas. Considerando sus particularidades, esto mismo se observa en el caso brasileño, donde el desarrollo de las luchas del proletariado industrial tiende a convertirse en uno de los mayores obstáculos a la institucionalización, al tiempo que hace que ésta se convierta en una exigencia aún más urgente.

En estas condiciones, la nueva etapa de la lucha de clases que se abre en el continente latinoamericano no sólo anuncia mayores niveles de acción de las masas y nuevas dificultades de las clases dominantes para estabilizar e institucionalizar su dominación política, sino que también prelude una lucha más intensa entre las fuerzas burguesas, pequeño-burguesas y proletarias por asumir la conducción del movimiento de masas. El que esto se realice en un contexto de agudización de las contradicciones de clase en todos los planos y niveles constituye una base real para concretar la posibilidad de un avance de las posiciones revolucionarias.

El movimiento de masas

La primera consideración en el análisis del movimiento de masas, en el periodo actual, está referida a los cambios operados en la estructura de clases de la sociedad latinoamericana.

Destaca, en primer lugar, el mayor desarrollo alcanzado por la clase obrera, producto del acelerado proceso de industrialización ocurrido desde la década de los cincuenta y de los efectos de la nueva división internacional del trabajo, que ha transferido a nuestros países nuevas ramas de la producción manufacturera. Asimismo, la expansión y diversificación de la industria han significado una expansión absoluta de la demanda de fuerza de trabajo, lo cual, aunado a su concentración geográfica,

ha favorecido una rápida socialización de hábitos, costumbres y tradiciones obreras, aumentando también, por esa vía, el peso del proletariado en el conjunto de la sociedad nacional. Finalmente, esta mayor importancia de la clase obrera industrial en la mayoría de los países latinoamericanos se manifestó en el plano político desde la segunda mitad de los años sesenta, cuando la clase obrera pasó a colocarse a la cabeza de la lucha de masas.

En el campo, el desarrollo del capitalismo —también orientado por las exigencias de la nueva división internacional del trabajo— ha significado una mayor concentración de la tierra, de los modernos medios de producción agrícola y de los créditos. Como contrapartida, se ha acelerado la descampesinización y proletarización de amplios contingentes rurales. La aparición de un proletariado agrícola crea, a su vez, nuevas condiciones. Por una parte, porque éste va constituyéndose en la avanzada del movimiento campesino y asumiendo y dirigiendo las luchas de los campesinos pobres y sin tierras. Y, por otra, porque, en su propia dinámica sociopolítica, va estableciendo las condiciones objetivas para un mayor desarrollo de la alianza obrero-campesina.

Finalmente, el semiproletariado urbano, que ha crecido significativamente por efecto del proceso de acumulación capitalista que gira en torno a la industria urbana. En un primer momento —a partir de la década de los cincuenta—, nutrido por las masas de campesinos migrantes a quienes el proceso de concentración de la tierra expulsaba a las ciudades, y también por sectores de la pequeña burguesía propietaria, a quienes el proceso de industrialización desplazaba de sus tradicionales funciones productivas, el semiproletariado urbano se comienza a nutrir (sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta), con toda aquella masa de desempleados y subempleados provenientes de la industria.

Esta nueva composición social del semiproletariado modifica, asimismo, las formas y tendencias que asume su presencia en el escenario político de la actual lucha de clases. Y ello porque si, en la década de los cincuenta, cuando aparecieron luchando por la vivienda y los servicios urbanos, sus luchas no mantuvieron ni continuidad ni pudieron articularse con las de otros sectores de las clases dominadas, a partir de la década de los sesenta, pero sobre todo en el transcurso de los setenta, la pauperización cada vez mayor de estos sectores y la presencia de obreros desplazados por la dinámica industrial, parecieran establecer condiciones favorables para el desarrollo de sus luchas pero con nuevas características: luchas continuas, prolongadas y articuladas a las luchas de los demás sectores de las clases dominadas y, particularmente, a las de la clase obrera.

Así, pues, la superexplotación del trabajo, la reducción de los niveles de vida y de consumo, el

desempleo y la miseria impuestos por el desarrollo capitalista, en el actual periodo contrarrevolucionario, han abierto el camino a nuevas contradicciones sociales. Expresadas desde fines de 1976 en una mayor actividad de las masas —aunque lenta, desigual y oscilante—, el propio desenvolvimiento de estas luchas ha ido señalando la presencia de nuevos factores, como son su constante ascenso, a la vez que la creciente presencia de la clase obrera como eje de aglutinación de los amplios sectores populares.

Este proceso, ampliado en 1977-78, se profundiza todavía más en el trayecto del 79, cuando las acciones de la clase obrera reafirmaron su carácter de vanguardia en el movimiento de masas. Si bien es cierto que la acción represiva del Estado ante estas luchas se ha constituido en el factor más demostrativo del carácter restringido y antipopular del proyecto de institucionalización, ésta no ha tenido, sin embargo, los efectos desorganizadores y desmovilizadores que tuvo durante la primera fase de la contrarrevolución. En la etapa actual, por el contrario, si bien la acción represiva de los cuerpos policíacos y paramilitares golpea al movimiento de masas, ello no ha detenido la elevación de los niveles de combatividad de los trabajadores, la politización de sus luchas reivindicativas, así como tampoco ha detenido la cada vez mayor claridad acerca de la necesidad de nuevas y superiores formas de lucha, como ocurrió primero en Nicaragua y ocurre, ahora, en otros dos países centroamericanos: El Salvador y Guatemala.

Los avances del movimiento de masas no están sin embargo, exentos de dificultades y contradicciones, por lo cual, tampoco presentan un carácter homólogo en cada uno de los países y en el interior de cada uno de ellos; su desarrollo expresa saltos y retrocesos. Sin embargo, pese a esas tendencias, deben ser precisadas dos cuestiones. Por una parte, el avance de las posiciones revolucionarias, que se expresa en el campo de las organizaciones políticas como una mayor capacidad de definiciones estratégicas y tácticas acompañada de una progresiva inserción de la izquierda revolucionaria en el movimiento de masas. Y, por otra, el paulatino debilitamiento de la izquierda tradicional —que, en la mayoría de los casos, sigue fuertemente ligada a sus concepciones reformistas— para convocar, articular y dirigir el movimiento de masas.

En suma, pues, la coyuntura política actual confronta nuevas características. No se trata solamente de un proceso de institucionalización, sino de una institucionalización burguesa que no controla íntegramente la misma burguesía; y ello porque las presiones de las masas comienzan a transitar de las formas reivindicativas —económicas y democráticas— a nuevas formas de organización y lucha, que expresan en el nivel político-ideológico una creciente autonomización con respecto de la

burguesía. Así, pues, como se ha indicado,

no hay ninguna razón para suponer que la lucha democrática que libran hoy las masas populares latinoamericanas pueda extenderse indefinidamente, permitiendo que, a cierta altura, se produzca el paso natural y pacífico al socialismo. Todo indica más bien que la lucha democrática y la socialista se entrelazarán para los trabajadores en un solo proceso, un proceso de duro y decidido enfrentamiento con la burguesía y el imperialismo.²⁶

En tal perspectiva, la alternativa real que enfrenta la lucha de clases, en el contexto contrarrevolucionario actual, es el enfrentamiento de dos proyectos de clase. Por una parte, desde la perspectiva de los intereses del imperialismo y la contrarrevolución, su proyecto busca consolidar la existencia de las llamadas "democracias restringidas" en el marco del Estado de contrainsurgencia. Y por otra parte, desde la perspectiva de los intereses de la clase obrera y el pueblo, el proyecto plantea como objetivo fundamental la lucha popular y revolucionaria, como base para la transformación socialista del régimen social.

26 R. M. Marini, "La cuestión del fascismo...", cit.